



GUADALAJARA, JALISCO, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

V I S T O S para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por SALVADOR RUIZ OLLOQUI VALENZUELA, en contra de LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN Y LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado en esta Primera Sala Unitaria el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, Salvador Ruiz Olloqui Valenzuela, interpuso por su propio derecho demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de las autoridades citadas en el párrafo que antecede, teniendo como actos controvertidos: a) Las cédulas de infracción con números de folio 1682408201711511 y 22912032019014, imputadas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan; b) La cédula de infracción con número de folio 20180071257, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; actos emitidos respecto del vehículo con placas de circulación **JNT6050** del Estado de Jalisco; demanda que se admitió por auto de fecha seis de junio de dos mil veintitrés.

2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, así mismo, se ordenó emplazar a las enjuiciadas, corriéndoles traslado con los archivos del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran contestación, bajo el apercibimiento legal correspondiente en caso de omisión; así mismo se les requirió para que al momento de contestar la demanda, exhibieran copias certificadas de los actos que el actor les imputó bajo el apercibimiento legal en caso de no hacerlo.

3. Por auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a las enjuiciadas dando contestación a la demanda, se admitieron las pruebas ofrecidas teniéndose por desahogadas dada su naturaleza, así mismo, se hizo constar que las autoridades demandadas no cumplieron con el requerimiento que les fue formulado mediante auto admisorio, por lo que se les tuvieron por ciertos los hechos que la parte actora le atribuyó.

4. Finalmente, el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se advirtió que no existía ninguna prueba pendiente por desahogar, por lo que se concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, razón por la cual se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa, 115 y 119 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los lineamientos para la substanciación de juicio en línea aprobados por la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, en la Decimoctava Sesión Ordinaria celebrada el día cinco de noviembre del dos mil veintiuno, publicados en el periódico oficial "el Estado de Jalisco", el dieciocho de noviembre del citado año.

II. El interés jurídico del accionante, quedó colmado con el recibo con número de folio A3033903 de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, que obra agregado a foja 8 del presente sumario, en los cuales se desprende de manera coincidente el número de placas vehiculares, y se señala en esta última al demandante como propietario del automotor materia de los actos controvertidos.



III. Toda vez que al contestar la demanda, el Director de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, hizo valer una causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, por ser cuestión de previo pronunciamiento y de orden público en términos de lo dispuesto por el arábigo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se procede en primer término a su estudio.

El referido servidor público manifestó que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el ordinal 29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues dice que resulta improcedente la acción de nulidad que intenta el actora, atendiendo a que el recibo de pago de refrendo resulta insuficiente para tener por acreditada la propiedad del vehículo y la afectación a su esfera patrimonial, ya que el recibo de pago únicamente se trata del pago de una obligación, cuya facultad le corresponda realizar al Estado, por ello, la misma no constituirle al particular un derecho para efectos de acreditar el interés jurídico en juicio.

Esta Sala Unitaria considera que no se actualiza la causal de improcedencia reseñada, con base en los siguientes motivos:

La parte actora anexó a la demanda el recibo con número de folio A3033903 de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, al cual se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley adjetiva de la Materia y 58 de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que obra agregado en el presente expediente, en que consta el pago que realizó la parte actora respecto de las citadas cédulas de infracción, respecto del vehículo marca STELLANTIS MEXICO S.A DE CV (ANTES FCA MEX), línea DODGE STRATUS 4 PTAS IMPORTADO, modelo 2004, con número de serie 1B3DL46X64N224405, con placas de circulación **JNT6050** del del Estado de Jalisco.

Luego, dicho documento es suficiente para demostrar el interés jurídico del promovente al acreditar con el mismo ser el propietario del automotor respecto del cual se expidieron las infracciones impugnadas y por ser el contribuyente obligado al pago de las mismas, lo que implica que es a quien se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte en los términos del ordinal, 19 fracción II del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte establece, que establece que deberán inscribirse en tal registro los vehículos domiciliados en el Estado.

V. Al no existir otras cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados por el demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

Es aplicable la jurisprudencia número PC.III.A. J/9 A (11a.)¹, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que señala:

"JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO, LOS TRIBUNALES LOCALES ESTÁN OBLIGADOS A ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLEZCA DE REQUISITOS FORMALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias sobre la interpretación del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esto es, si el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad tiene o no la obligación de analizar de manera preferente los conceptos de anulación vinculados con el fondo del asunto, cuando de manera prioritaria se hubiese declarado fundado

¹ Publicada con el registro digital número 2024109, Instancia: Plenos de Circuito, undécima época, Semanario Judicial de la Federación.



un motivo de disenso de forma (indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto). Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que en atención a los principios de mayor beneficio y de justicia completa, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco debe y tiene la obligación de decidir sobre los conceptos de anulación de fondo, con independencia de que el acto impugnado carezca de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Justificación: De la interpretación armónica y funcional de los artículos 1, primer párrafo, y 72 a 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se obtienen las siguientes premisas: El Tribunal de Justicia Administrativa estatal debe resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares; se fijan los requisitos que debe contener la sentencia (fijación clara de la litis, fundamentos jurídicos, puntos resolutivos y los términos del cumplimiento); no obstante, los formalismos judiciales constituyen un obstáculo para la resolución de los asuntos; de igual manera, las causas de nulidad comprenden tanto aspectos de fondo como de forma. Luego, derivado del análisis del anterior segmento normativo, a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pueden extraer diversos principios, a saber: congruencia, exhaustividad, justicia completa y mayor beneficio, pro fondo, entre otros. En ese contexto, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa local debe identificar todos los argumentos en que descansa la pretensión anulatoria de la parte actora, sobre todo aquellos donde se hacen valer argumentos orientados a obtener la insubsistencia total del acto impugnado; es decir, argumentos encaminados a obtener el mayor beneficio, cuyo objetivo es restituir al particular en el goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes del acto o resolución impugnados."

V. En ese sentido, este Juzgador analiza el planteamiento de la accionante, consistente en la negativa lisa y llana de conocer el contenido de las cédulas de infracción impugnadas, ya que se enteró de su existencia el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, al ingresar a la página web del adeudo vehicular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, para revisar el estatus de su vehículo.

Se considera que asiste la razón a la parte actora, ya que al negar **lisa y llanamente** conocer el documento en que consta la mismas, la carga de la prueba sobre la legal existencia por escrito correspondía a la autoridad demandada a quien le fue imputado, tal y como lo establece el numeral 48 Bis de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que a continuación se transcribe:

"Artículo 48 Bis.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho"

Entonces, al ser la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, a quien la parte actora imputó los citados actos, debió acreditar en este juicio su emisión conforme a los requisitos de legalidad contenidos en el numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como su constancia de notificación y en ese tópico permitir a la parte actora que ampliara su demanda al respecto. Pero no lo hizo así, de ahí que no colmó con su carga probatoria, al no demostrar si el mismo cumplía con los requisitos de validez. A mayor abundamiento, se considera importante resaltar que los actos administrativos, por regla general, se presumen legales, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 48 Bis de la Ley de Justicia Administrativa, y 14 y 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, pero lo anterior tiene una excepción, estatuida en los mismos ordinales: cuando el gobernado **niega lisa y llanamente** conocer los actos, sin que la negativa implique la afirmación de otro hecho las autoridades son las que tienen la carga de la prueba, como ocurrió en la especie, caso en el que, como no puede demostrarse un hecho o acontecimiento negativo, la obligación de demostrar si los actos son legales se revierte hacia las autoridades, las cuales deben exponerlo, lo que en este caso omitieron las enjuiciadas, además de que no allegaron al



presente juicio los actos controvertidos como se aprecia de constancias, de ahí que no desvirtuaron la negativa formulada por la parte actora al respecto.

La omisión procesal referida, provoca que el promovente quede en estado de indefensión al no poder conocer los pormenores y circunstancias contenidas en el acto controvertido, ya que no puede verificarse si se sitúa dentro de los supuestos legales de infracción que señala la autoridad emisora en él; además de que resulta evidente que el accionante no puede ejercer su derecho de audiencia y defensa en contra de la actuación que le fue imputada, toda vez que nunca le fue dada a conocer.

En consecuencia, debe considerarse que las autoridades enjuiciadas en el caso que nos ocupa, no cumplieron con la obligación procesal de que se trata, al no desvirtuar la negativa del actor, relativa a que no conocía la referida cédula de infracción, por consiguiente se debe declarar la nulidad de la misma, al no poderse verificar si el documento impugnado cumplía o no con lo dispuesto en los ordinales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; considerándose que en la especie se actualiza la causal de anulación prevista por los preceptos 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana de los actos controvertidos.**

Apoya lo sentenciado la jurisprudencia número 2ª J. 209/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 188/2007-SS bajo la voz:

"JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN." Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación."



Así mismo, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 117/2011², sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/2011 que es del tenor siguiente:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Conforme a la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el momento de la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior por el Magistrado instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los principios de economía e igualdad procesales, que serían incumplidos con una conclusión distinta."

Igualmente cobra aplicación lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro 3, Tomo 4, diciembre de dos mil once, página 2645, con número de registro 160591, de rubro:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Finalmente, en virtud de que la parte actora realizó su pago generado por dichos actos, como se desprende en el recibo oficial con número de folio **A3033903** de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, se ordena a la citada dependencia le devuelva la suma que enteró conformidad con el arábigo 76 de la ley adjetiva de la materia, como parte de la restitución al derecho vulnerado con dicha actuación.

A lo anterior encuentra aplicación por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 144, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007, novena época, de rubro y texto siguiente:

² Visible en la página 317 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil once, consultada por su voz en el IUS 2010



"AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica."

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 72, 73, 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y resolver este juicio.

SEGUNDO. Resultó infundada la causal de improcedencia que hizo valer el Director de lo Contencioso del Municipio de Guadalajara, en consecuencia, no es de sobreseerse, ni se sobresee el presente procedimiento.

TERCERO. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, y las enjuiciadas no acreditaron sus excepciones, por lo tanto;

CUARTO. Se declara la nulidad lisa y llana de los actos impugnados consistentes en: a) Las cédulas de infracción con números de folio 1682408201711511 y 22912032019014, imputadas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan; b) La cédula de infracción con número de folio 20180071257, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; actos emitidos respecto del vehículo con placas de circulación **JNT6050** del Estado de Jalisco.

QUINTO. Se ordena a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, efectúe la cancelación de las infracciones señaladas en el inciso a) del resolutivo que antecede, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

SEXTO. Se ordena a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, efectúe la cancelación de los actos controvertidos en el inciso b) del resolutivo cuarto del presente fallo, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

SÉPTIMO. Se ordena a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, devuelva a la parte actora la cantidad que pagó, misma que se desprende del recibo oficial con número de folio A3033903 de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por concepto de los actos declarados nulos en el presente fallo.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRONICO A LA PARTE ACTORA Y A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvió el Magistrado **HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ**, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante el Secretario, Licenciado **Bernardo Villalobos Flores**, quien autoriza y da fe. -----
HLH/BVF/cjrl*



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE 2808/2023
PRIMERA SALA UNITARIA

Guadalajara, Jalisco; a 22 veintidós de febrero del 2024 dos mil veinticuatro.

Vista la cuenta que antecede, y toda vez que las partes consintieron tácitamente la sentencia definitiva dictada en autos, al no haber interpuesto medio de defensa alguno en su contra, no obstante haber sido legalmente notificadas de la misma, según se desprende de las constancias levantadas por el Actuario adscrito a esta Sala, que obran agregadas en el expediente en que se actúa, en tales condiciones se declara que dicha sentencia ha quedado firme, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

En consecuencia, se concede a las autoridades demandadas un término de **15 QUINCE DÍAS**, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que cumplan voluntariamente la sentencia referida en líneas anteriores, e informen a esta Primera Sala sobre el cumplimiento de la misma, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se procederá a la ejecución forzosa en los términos de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo acordó y firma el Magistrado HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ante la Secretaria, Licenciada CINTHIA JAZMIN RUIZ LÓPEZ, quien autoriza y da fe.-----

HLH/CJRL